



TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN SALA CIVIL

Medellín, dieciocho (18) de febrero de dos mil veintidós (2022)

Radicado: 05001 31 03 014 2020 00104 01
Proceso: Declarativo.
Demandantes: INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S.A. E.S.P.
Demandados: HEREDEROS INDETERMINADOS DE RAFAEL VILLA RESTREPO

Conforme la solicitud que antecede, la cual consiste en que se resuelva la alzada presentada contra la sentencia de primera instancia, es decir, que se adelante el turno para proferir la decisión de segunda instancia, la Sala niega lo mismo con base en los siguientes argumentos:

El artículo 18 de la ley 446 de 1.998, deja en claro que:

“Orden para proferir sentencias. Es obligatorio para los Jueces dictar las sentencias exactamente en el mismo orden en que hayan pasado los expedientes al despacho para tal fin sin que dicho orden pueda alterarse, salvo en los casos de sentencia anticipada o de prelación legal. Con todo, en los procesos de conocimiento de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo tal orden también podrá modificarse en atención a la naturaleza de los asuntos o a solicitud del agente del Ministerio Público en atención a su importancia jurídica y trascendencia social.

“La alteración del orden de que trata el inciso precedente constituirá falta disciplinaria. En estos casos, el Consejo Superior de la Judicatura o los Consejos Seccionales, en lo de su competencia, solicitarán al Juez o Ponente la explicación pertinente para efectos administrativos y disciplinarios. El Consejo Superior de la Judicatura o los Consejos Seccionales obrarán de oficio o a petición de quienes hayan resultado afectados por la alteración del orden.”

La anterior disposición, que ha sido objeto de juicio de constitucionalidad (Corte Constitucional, sentencia C-248 de 1999), solo contempla una excepción para la alteración del orden, esto es, en los procesos Contencioso Administrativos, eso sí, con unos requerimientos muy específicos, los cuales son ajenos a la jurisdicción en la que nos encontramos.

Ahora, se fundamenta la solicitud en estudio en que se espera prontitud para la construcción de las líneas de transmisión de energía eléctrica, de lo que dice, “... *entraña la prestación de un servicio público esencial en el cual está involucrado el interés general, lo cual tiene protección constitucional...*”; pues bien, ello es una falacia por las razones que se continúan exponiendo.

1. El demandante accionó para la imposición de una servidumbre pública de conducción de energía eléctrica (artículo 28 ley 56 de 1981), por lo que dentro del trámite de entrada se le autorizó “... *el ingreso al predio y la ejecución de las obras que de acuerdo con el plan de obras del proyecto presentado con la demanda...*”, tal como lo prevé el artículo 28 antes aludido, y según se verifica en la diligencia llevada a cabo *in situ* el 3 de mayo por el Juzgado Civil del Circuito de Caucasia (ver folios 158 a 161 cuaderno principal). Ahí expresamente se le facultó para “*la ejecución de las obras*”, por lo que indefectiblemente las mismas cuentan con el beneplácito jurisdiccional, y su realización es asunto de la parte actora.
2. La imposición de la servidumbre fue favorable en la sentencia atacada, y lo que el actor está apelando exclusivamente, es en relación a los numerales cuarto y séptimo de la parte resolutive de

tal decisión (ver folio 19 escrito apelación sentencia, archivo 24 expediente digital), esto es, puntos que corresponden a la indemnización a los demandados y solicitud sobre lo mismo, a lo cual se atenderá la Sala al momento de proferir sentencia en virtud del principio de limitación (artículo 328 C. G. del P.)

Ejecutoriado lo anterior vuelva el asunto al Despacho a fin de resolver lo relacionado con los traslados para alegatos conclusivos.

NOTIFÍQUESE;

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'José Omar Bohórquez Vidueñas', is positioned above the printed name.

JOSÉ OMAR BOHÓRQUEZ VIDUEÑAS.
MAGISTRADO